

EL ARTÍCULO DEL DÍA

Jordi Solé Tura
Diputado y dirigente del PSC.

La sentencia y la hipocresía

Acataré como ciudadano de un país democrático, pero me indigna esta venganza política miserable, este montaje con el GAL que sólo perseguía derrotar al PSOE y destruir a sus principales dirigentes

La sentencia es, naturalmente, la que se dispone a dictar la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre el *caso GAL;* o sea, una sentencia que todavía no existe, pero que todo el mundo conoce al pie de la letra. Como ciudadano de un país democrático tengo la obligación de acatar esta sentencia cuando se publique, y esto es lo que haré.

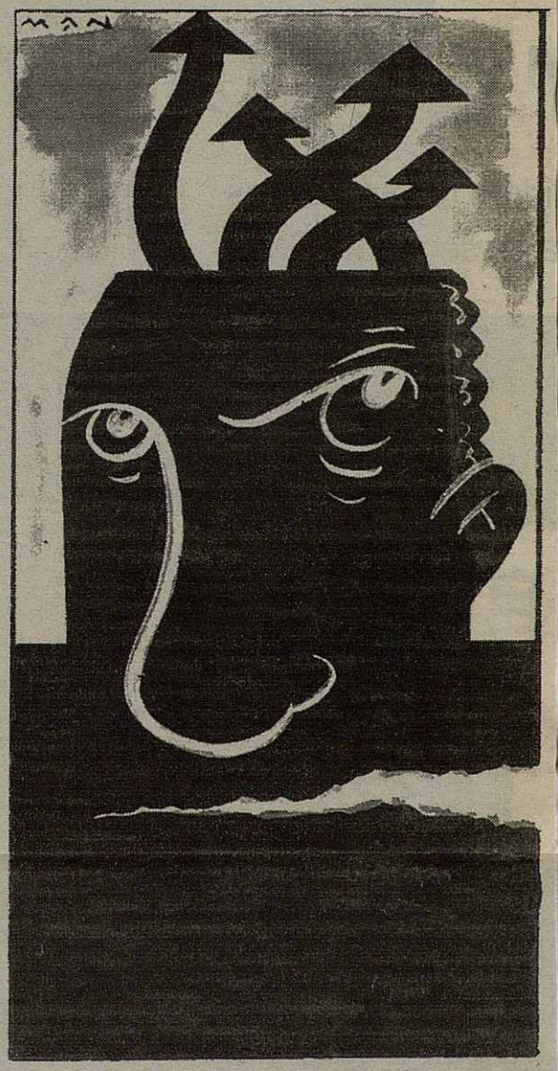
Pero como ciudadano también tengo el derecho de expresar mi opinión al respecto, no sólo sobre la sentencia sino también sobre el proceso que ha culminado con ella. Y mi opinión se puede resumir diciendo, simplemente, que este largo proceso y su corolario final pasarán a la historia como uno de los ejemplos más perfectos de hipocresía política.

Muchos comentaristas, políticos y periodistas se lamentan ahora de que una sentencia de este calado se conozca con todo detalle antes de que se haya dado a conocer formalmente. A mí también me preocupa el asunto. Pero muchos de los que ahora se lamentan parecen olvidar que la filtración ha sido la norma general desde que empezó todo el proceso del GAL.

Cuando el juez **Baltasar Garzón** comenzó a instruir este proceso –o, mejor dicho, cuando retomó la instrucción tras su breve y conflictivo paso por la política– las declaraciones presuntamente secretas de los imputados y testigos pasaban en pocos minutos del despacho judicial a las páginas de *El Mundo* y otros periódicos y revistas y a las tertulias de determinadas emisoras. Esto ha sido así durante toda la instrucción y sobre esta base el vicepresidente **Francisco Álvarez-Cascos** pudo lanzar su célebre amenaza: la sociedad ya ha opinado y los jueces tienen que acatar esta opinión. De modo que escándalo sí, pero no sólo ni principalmente ahora, y esto, para mí, es pura hipocresía.

Hipocresía es también la instrumentalización de la solemnidad de la toga para ocultar o justificar lo que fue desde el primer momento un enorme montaje político cuya finalidad no era otra que hacer perder las elecciones al partido socialista y destruir políticamente a sus principales dirigentes.

Los organizadores de este montaje, los que desde periódicos, tribunas radiofónicas e instancias gubernamentales han lanzado toneladas de insidias, han roto centenares de reglas de conducta profesional y han montado varias conspiraciones superpuestas son los mismos, exactamente los mismos, que desde 1982 incitaban al ministro del Interior socialista **José Barrionuevo** y a **Rafael Vera** a ser más duros e implacables contra ETA, a utilizar todos los medios, incluyendo el militar, para destruir a los terroristas y que cuando veían que estos dos dirigentes no seguían sus incendiarias consignas pedían ruidosamente su dimisión por ser demasiado blandos.



Hipocresía es igualmente la utilización de este dramático asunto por parte del Partido Popular como forma de lucha para vencer a su enemigo socialista; y digo enemigo, porque así lo consideran los dirigentes del PP, no adversario, que es lo que en democracia define a los contrarios que se mueven dentro de las mismas reglas de juego.

Estos dirigentes populares no dudaron ni un minuto en romper la indispensable unidad de la lucha antiterrorista para lograr su victoria frente al enemigo socialista y convirtieron en una guerra oscura, sórdida y miserable contra demócratas lo que tenía que ser un campo de acción común enormemente delicado, porque cada gobierno hereda una parte del pasado y debe luchar contra el mismo terrorismo. Aquí se ha entrado a saco y se ha roto todo, mientras el enemigo de verdad, el terrorismo, se frotaba las manos.

Hipocresía es, en fin, el doble rasero que se ha aplicado sin aparente sonrojo y no sólo desde las fuerzas políticas, a la hora de buscar responsabilidades. Si de verdad se quería castigar a unos gobernantes que infringieron las leyes en su lucha contra el terrorismo, ¿por qué sólo se ha exigido responsabilidades a unos y no a todos los gobernantes de la democracia, que se enfrentaron con el mismo problema, chocaron con las mismas dificultades y utilizaron los mismos medios?

En el importante editorial publicado en estas mismas páginas ayer, viernes, se hacía una contundente referencia a este problema pidiendo claridad y equidad, pero ninguno de los acusadores públicos de **Barrionuevo** y **Vera** ha dicho esta boca es mía.

Todos sabemos, aunque no todos lo digamos, que el Batallón Vasco-Español, la Triple A y el GAL eran más o menos lo mismo, que todos ellos ejercieron una gran presión sobre la democracia, que todos los ministros del Interior de los gobiernos democráticos –o sea, de la UCD y el PSOE– tuvieron los mismos problemas y las mismas angustias para contenerlos y desactivarlos, y que tras un duro combate en el que, finalmente, se consiguió la cooperación del Gobierno francés, fue precisamente el Gobierno socialista, con **Barrionuevo** de ministro, el que acabó definitivamente con ellos.

Pero nadie ha dicho nada sobre los gobiernos anteriores y sus ministros, nadie ha pedido responsabilidades, y ahí están ocupando diversos cargos de importancia, públicos y privados, cosa que me parece muy bien. Y, en cambio, el ministro que terminó con todo aquello y cuya única diferencia con sus antecesores es que es militante socialista irá a la cárcel si la sentencia es como nos han contado.

En definitiva, como ciudadano acataré la sentencia, pero al mismo tiempo proclamaré con toda la fuerza que pueda mi indignación y mi angustia ante la monstruosa hipocresía que ha transformado lo que tenía que haber sido una pugna democrática en una venganza política miserable.